

# POBREZA Y REVUELTA DE SUBSISTENCIA. LOS SAQUEOS DE 1989 EN ARGENTINA

Sergio Serulnikov

ENTRE el 24 de mayo y el 1 de junio de 1989, las más importantes ciudades argentinas registraron cerca de trescientos episodios de violencia asociados a saqueos de comercios. Los principales focos fueron los conglomerados urbanos del Gran Buenos Aires, Rosario y Córdoba y, en menor medida, Mendoza, Tucumán, la Capital Federal y algunas otras capitales de provincia.<sup>1</sup> Según una estimación gruesa disponible, alrededor de 40.000 personas tuvieron una participación directa.<sup>2</sup> Al principio, las acciones fueron protagonizadas por pequeños grupos compuestos primordialmente de mujeres. Entraban de manera pacífica a los establecimientos, llenaban sus bolsas con leche, azúcar, arroz, harina u otros alimentos y se retiraban sin abonar. Pronto, sin embargo, comenzaron a registrarse ataques violentos y multitudinarios. Las calles de San Miguel, San Justo y Moreno, en el conurbano bonaerense, Villa Gobernador Gálvez, el barrio sur de Rosario o Villa Páez en Córdoba se convirtieron en escenarios de virulentas batallas campales. Miles de personas asaltaron casi todos los negocios de algunas de esas localidades enfrentándose a sus dueños y la policía.<sup>3</sup> Para entonces no solo se tomaban productos de primera necesidad sino también dinero, electrodomésticos y otro tipo de mercancías. Algunos propietarios comenzaron a electrificar las puertas de sus locales e intentar defenderse con armas de fuego. Otros procuraron calmar a la multitud mediante la distribución gratuita de comida. Hubo repetidos rumores de que hordas de gente se desplazarían al centro de las ciudades para arrasar allí con los negocios. Las escuelas suspendieron las clases, los colectivos dejaron de circular al atardecer e innumerables comercios cerraron por precaución sus puertas generando desabastecimiento. Durante días el país pareció detenerse. La gravedad de la situación llevó a que se declarase el estado de sitio en todo el territorio nacional y el estado de emergencia en algunas provincias. Unas quince personas perdieron la vida y hubo cientos de heridos y arrestados. Se trató de la primera ola de saqueos por motivos económicos en la Argentina moderna.

<sup>1</sup> Según Nicolás Iñigo Carrera, María Celia Cotarelo, Elizabeth Gómez y Federico M. Kindgard hubo 282 acciones de las cuales los saqueos propiamente dichos constituyen entre un 75% y 80% ("La revuelta argentina 1989-1990", PIMSA, *Documento de Trabajo* n° 4 [1995], pp. 45-56). Un relevamiento contemporáneo a los hechos del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría dio una cifra más alta, 330 saqueos. Los principales epicentros fueron Rosario con 115 episodios y el Gran Buenos Aires con 100 (*Página 12*, 3/6/1989).

<sup>2</sup> Informe del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría (*Página 12*, 3/6/1989). Habrían participado unas 18.000 personas en Rosario, 16.000 en el Gran Buenos Aires y 6.000 en el resto de las ciudades.

<sup>3</sup> Por ejemplo, en Villa Gobernador Gálvez se informó "que prácticamente no quedó un negocio en pie", incluyendo desde pequeñas tiendas hasta plantas frigoríficas (*Página 12*, 31/5/1989). El Intendente del partido del conurbano bonaerense General Sarmiento admitió que, "¡hay una franja de tres kilómetros donde ya no hay nada que saquear!" [Citado en María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, "Los saqueos y las ollas populares de 1989 en el Gran Buenos Aires. Pasado y presente de una experiencia formativa", *Revista de Antropología*, Sao Paulo, 44:2 (2001), p. 152].

Aunque emergió durante un inusitado pico hiperinflacionario, el evento tomó en gran medida por sorpresa a la clase dirigente. En marzo de ese año, consultado si los masivos saqueos ocurridos por esos días en Venezuela, el denominado Caracazo, podrían replicarse en Argentina, el candidato presidencial del peronismo Carlos Menem respondió que lo veía poco factible. "Argentina no es Venezuela —declaró—, si hay un movimiento obrero disciplinado que acata a sus dirigentes, ése es el nuestro".<sup>4</sup> En la misma línea se pronunció el Secretario General de la Confederación General del Trabajo (CGT), Saúl Ubaldini. Si bien creía, como todos, que las penurias que atravesaban los asalariados y sectores de bajos ingresos eran alarmantes, la palabra hambre, consustancial con los saqueos de alimentos, no formaba todavía parte de su léxico. Y al igual que Menem, consideraba que llegado el caso las poderosas organizaciones que los representaban serían capaces de canalizar una eventual explosión de descontento. La confianza en la inmunidad de la sociedad argentina a las erupciones de desesperación observadas en Caracas reflejaba en verdad una visión muy extendida de los grupos dirigentes y el sentido común de vastos sectores sociales. Era la noción según la cual, en palabras de una prominente columna política de la época, "los argentinos comían por más pobres que fueran".<sup>5</sup> Los sociólogos Víctor Armony y Gabriel Kessler han mostrado que en la década del ochenta, pese a las muchas evidencias cuantitativas y cualitativas del avance de la pobreza, "el hambre aparece como transitorio y hasta una anomalía con algún componente individual para muchos, sin lograr todavía percutir en las imágenes que el país tiene sobre sí mismo".<sup>6</sup>

Como todo mito social arraigado, la idea del país sin hambre no carecía de fundamentos. Comparado con otros países de la región, Argentina había logrado durante el siglo veinte significativos niveles de integración social, empleo, protección laboral y distribución progresiva de los ingresos. Era el producto de las políticas del primer peronismo, con su comprensiva legislación social, estado de bienestar e influyentes, si muchas de ellas corruptas y acomodaticias, organizaciones gremiales, así como del impacto combinado del desarrollo industrial, la masiva inmigración europea, la formidable capacidad de producción alimentaria, una densa red de sectores medios y un extensivo sistema educativo público y gratuito que llegó a generar tasas de alfabetismo comparables a las europeas o norteamericanas. Si Argentina quedaba en Latinoamérica, en el fondo no lo era del todo. Para muchos no lo era en absoluto.

Podría afirmarse que el principal efecto de los sucesos de 1989, por el momento histórico en el que ocurrieron y ser los primeros en su clase, fue precisamente cambiar la imagen que la sociedad tenía de sí misma. Tuvieron una dimensión que el sociólogo italiano Alberto Melucci, en relación a otros movimientos sociales de la época, llamó *profética*: "su función es revelar lo que está en juego, anunciar a la sociedad que existe un problema fundamental en una determinada área. Asumen crecientemente una función simbólica: podría probablemente hablarse de una función profética. Son una suerte de nuevos medios de comunicación".<sup>7</sup> En virtud de su masividad y escala geográfica, el problema central que

<sup>4</sup> *Página 12*, 5/3/1989.

<sup>5</sup> Joaquín Morales Solá, *Clarín*, 4/6/1989.

<sup>6</sup> Víctor Armony y Gabriel Kessler, "Imágenes de una sociedad en crisis. Cuestión social, pobreza y desempleo", en Marcos Novaro y Vicente Palermo (comps.), *La historia reciente. Argentina en democracia*, Edhasa, Buenos Aires, 2004, p. 101. Valeria Manzano muestra que en las décadas de 1960 y 1970 incluso grupos revolucionarios que proponían interpretar la sociedad argentina a luz de imaginarios tercermundistas, en contraposición con las teorías de la modernización y el marxismo clásico, ponían el acento en los antiguos bolsones de pobreza villeros o las provincias de noreste y noroeste pues el desarrollo industrial, modernidad y cosmopolitismo de las áreas metropolitanas de Buenos Aires, Rosario o Córdoba se ajustaban mal a ese tipo de categorización ("Argentina Tercer Mundo: Nueva Izquierda, emociones y política revolucionaria, en las décadas de 1960 y 1970", *Desarrollo Económico*, 54: 212 [2014], pp. 80-81).

<sup>7</sup> Alberto Melucci, "The Symbolic Challenge of Contemporary Movements", *Social Research*, 52 (1985), p. 797. Traducción del autor.

los saqueos anunciaron era que la exclusión social no podía ya ser vista como un asunto contingente y circunscripto a un sector minoritario de la población —los llamados pobres estructurales que habitaban las villas miserias y otros asentamientos precarios de las grandes ciudades— o a tradicionales focos de pobreza endémica como las provincias del noroeste.<sup>8</sup> Tampoco que se tratara del producto friccional propio de un determinado estadio de desarrollo, una suerte de afección del progreso, o de un reservorio de trabajo funcional al sistema productivo, un ejército industrial de reserva. Tras casi tres lustros de retroceso industrial y precarización del empleo, semejantes racionalizaciones resultaban ya inviábiles. La pobreza a gran escala, sin una demarcación espacial precisa y sin horizontes de superación, había llegado para quedarse.

En los años por venir, muchos científicos sociales en el país, siguiendo al sociólogo francés Robert Castel, conceptualizarían el fenómeno como “el fin de la sociedad salarial”.<sup>9</sup> Tulio Halperín Donghi, en referencia a problemáticas específicas a la historia nacional, apeló a una imagen no menos sugerente: “la larga agonía de la Argentina peronista”, lo llamó.<sup>10</sup> Lo que los motines de subsistencia hicieron fue marcar un cambio de época en la discusión pública sobre la cuestión social. La misma dejó de gravitar primordialmente en torno al mundo de los trabajadores y sus derechos, para comenzar a centrarse en los pobres y sus necesidades.<sup>11</sup> Y, junto con la pobreza, una novedosa modalidad colectiva de intervención en los asuntos públicos haría su tumultuosa irrupción. Las imágenes que los medios gráficos y audiovisuales amplificaron con repetitiva crudeza portaban un mensaje: la política de los pobres, con su pesada carga de ambivalencia, inmediatez, imprevisibilidad y aparente desorden, no podría ya ser soslayada. No se trataba solo de qué hacer con los pobres, sino también de lo que los pobres hacían, y podían llegar a hacer. Cuando Carlos Menem o Saúl Ubaldini hablaban del pueblo trabajador creían estar hablando por el todo; los multitudinarios saqueos revelaron que lo hacían por una de las partes. Ya nadie podría hablar así desde entonces. Empezando por los mismos actores de los sucesos que, como nunca antes, vieron su imagen multiplicada en cientos de asaltos colectivos en tantos otros barrios humildes de las principales ciudades del país. La pobreza estaba en todos lados. Había llegado la hora de tomar nota de sus consecuencias.<sup>12</sup>

De las consecuencias de la política de los pobres, tal y como se puso de manifiesto en mayo y junio de 1989, trata este artículo. Tras repasar las condiciones económicas detrás del estallido, se exploran sus objetivos, organización y blancos de ataque. Procuramos asimismo discernir los valores que permearon las acciones a partir de los patrones de conducta y los discursos de sus partícipes. Finalmente, situaremos el fenómeno en el marco de las formas de protesta y movilización social en la historia argentina reciente. Las principales fuentes de información son periódicos y revistas de la época, el tipo de documentación

<sup>8</sup> Las villas miserias son asentamientos informales ubicados en las grandes ciudades del país, caracterizadas por viviendas precarias y paupérrima infraestructura urbana. Son análogas a las *favelas* en Brasil, los *cantegriles* en Uruguay, los *pueblos nuevos* en Perú o las llamadas *poblaciones callampa* o *campamentos* en Chile.

<sup>9</sup> Robert Castel, *Las metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del asalariado*, Editorial Paidós, Buenos Aires, 1997.

<sup>10</sup> Tulio Halperín Donghi, *La larga agonía de la Argentina peronista*, Ariel, Buenos Aires, 1994.

<sup>11</sup> Para un análisis en esta línea, véase Mónica Gordillo, “Acciones contenciosas: la ruptura de 1989”, *Contenciosa*, 2 (2014).

<sup>12</sup> Un artículo de mi autoría escrito a poco de ocurridos los hechos señalaba la originalidad del evento respecto a las organizaciones gremiales o político-partidarias previas, pero sin reconocer las duraderas mutaciones en la estructura socioeconómica detrás del estallido ni la especificidad de las prácticas políticas que se derivaban del fenómeno y que se desplegarían en toda su dimensión en los años venideros. Los saqueos eran más bien interpretados a la luz de las teorías de los “nuevos movimientos sociales”. Sergio Serulnikov, “When Looting Became a Right. Food Riots and Urban Poverty in Argentina (May-June 1989)”, *Latin American Perspectives*, 82:3 (1994), pp. 69-89.



Menem, 1989

usual en la reconstrucción de esta clase de movimientos. Aunque presentan limitaciones, sería erróneo en mi opinión desestimarlas por considerar que, a diferencia de los testimonios orales, ocuyen tramas clandestinas por parte de activistas políticos, líderes barriales, redes delictivas o las propias fuerzas de seguridad.<sup>13</sup> Una explosión social de tamaña dimensión espacial y simultaneidad, que carecía de precedentes, deja poco lugar para teorías conspirativas de cualquier índole. De hecho, una de las preocupaciones centrales de los medios periodísticos y las autoridades gubernamentales fue la presencia de agitadores o promotores de la violencia –personas u organizaciones que incitaron a los saqueos desde las sombras por motivos distintos a los de sus partícipes directos. Poco encontraron más allá de las inevitables situaciones particulares propias de cada localidad. Las prevenciones metodológicas que hemos adoptado consisten en descartar las caracterizaciones generales de los eventos insertas en notas periodísticas, columnas de opinión, editoriales o declaraciones de funcionarios o dirigentes políticos y sociales. El examen de los objetivos y las

<sup>13</sup> Un análisis en esta clave para los saqueos de 2001 en Argentina, en Javier Auyero, *La zona gris. Violencia colectiva y política en la Argentina contemporánea*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2007. Los escasos estudios sobre los saqueos de 1989 –citados a lo largo de este artículo– están basados en fuentes periódicas. A diferencia de los eventos de 2001, no se hicieron en su momento trabajos de campo con entrevistas. Solo hay una investigación de historia oral (el ya referido artículo de María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino sobre algunos barrios de los partidos bonaerenses de San Miguel y José C. Paz), cuyo objeto central de análisis, como no puede ser de otra manera considerando los más de 25 años pasados entre los hechos y los traumáticos eventos ocurridos desde entonces, incluyendo los saqueos de 2001, es la construcción de la memoria social del acontecimiento en relación a las posteriores experiencias grupales y/o trayectorias personales. En este artículo nos focalizamos en otro tipo de problemas históricos, cuestiones conceptuales y escala de observación.

motivaciones de los actores están basados en sus prácticas y testimonios. La existencia de distintos reportes, con sesgos ideológicos muy diferentes entre sí, ofrece cierto control sobre la autenticidad y representatividad de las fuentes.<sup>14</sup>

En suma, aunque parcial y fragmentaria, la base empírica a nuestra disposición provee material suficiente para ofrecer un análisis informado de la dinámica y significado de la primera revuelta de subsistencia en el país y la consiguiente irrupción de la nueva cuestión social en la escena pública.

#### HIPERINFLACIÓN Y POBREZA

Si bien los saqueos masivos de 1989 fueron desencadenados por una inusitada escalada hiperinflacionaria, derivaron en verdad de mutaciones de largo plazo en la estructura social. La degradación de las condiciones de vida de los sectores de bajos ingresos no era, como muchos creían en la época, un fenómeno coyuntural sino una tendencia que llevaba años de maduración y solo se agravaría con el tiempo. Dado que hay una copiosa literatura sobre la llamada nueva pobreza, bastará resumir aquí algunos rasgos básicos que sirvan de contexto a nuestro análisis.

Desde mediados de los años setenta, en particular a partir de la dictadura militar de 1976, Argentina experimentó un marcado proceso de concentración económica, caída de la actividad industrial, contracción del Estado y aumento de la precarización laboral. Como en el resto del continente, la crisis de la deuda externa provocada por la cesación de pagos de México en 1982 abrió a su vez un período de fortísimos desequilibrios externos y ajuste fiscal. El impacto de esta tendencia en los sectores de bajos ingresos fue profunda y, en muchos aspectos, irreversible. Se calcula que entre 1975 y fines de los años ochenta los asalariados perdieron sobre un 40% del valor de sus ingresos. Para 1989, la participación del salario en el producto había alcanzado los niveles más bajos desde mediados de siglo.<sup>15</sup> La pobreza se incrementó de manera sustantiva. Ello se advierte con particular nitidez en el Gran Buenos Aires, la zona que concentra alrededor de un cuarto de la población total del país, la de mayor actividad industrial y para la cual se cuenta con estadísticas confiables. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares que el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) comenzó a realizar para esta época, el porcentaje de hogares pobres en el conurbano bonaerense se elevó durante los años ochenta en un 67,4%. Representaban el 20,6% en 1980, el 33,0% en 1988 y el 34,5% en 1990, un registro que incorpora ya los efectos de la hiperinflación de 1989.<sup>16</sup> En 1988, un 8,8% de la población estaba bajo la línea de indigencia, vale decir, hogares con ingresos inferiores al costo de una canasta básica de alimentos.<sup>17</sup> Según han apuntado Oscar Altamir y Luis Beccaria, el resto de los grandes conglomerados urbanos debieron registrar tendencias similares.<sup>18</sup>

<sup>14</sup> Cabe notar que la cobertura *Página 12*, un diario fundado dos años antes, produjo crónicas periodísticas de notable calidad profesional. En sus páginas se hayan algunos de los testimonios de participantes en saqueos más sugerentes y espontáneos que puedan encontrarse tanto en textos periodísticos como académicos. Dos de sus periodistas, Claudia Acuña y Sergio Ciancaglini, obtuvieron por estos reportes el Premio Internacional de Periodismo Rey de España.

<sup>15</sup> Alberto Minujin, "En la rodada", en Alberto Minujin, Luis Beccaria *et al.*, *Cuesta abajo. Los nuevos pobres: efectos de la crisis en la sociedad Argentina*, Unicef-Losada, Buenos Aires, 1992, p. 21.

<sup>16</sup> Alberto Minujin, "En la rodada", p. 24.

<sup>17</sup> Miguel Murmis y Silvio Feldman, "La heterogeneidad social de las pobreza", en Alberto Minujin, Luis Beccaria *et al.*, *Cuesta abajo*, p. 59.

<sup>18</sup> Oscar Altamir y Luis Beccaria, "Efectos de los cambios macroeconómicos y de las reformas sobre la pobreza urbana en Argentina", en Enrique Ganuza, Lance Taylor y Samuel Morley (eds.), *Política macroeconómica y pobreza en América Latina y el Caribe*, Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 1998, p. 116.

Un dato crítico es que el grupo de mayor crecimiento dentro de los sectores de bajos ingresos fue el de familias pauperizadas. Los llamados “nuevos pobres” tendían a compartir el perfil sociocultural con los no pobres (educación media y superior, estabilidad familiar o número de hijos) pero compartían con los “pobres estructurales” ingresos insuficientes, precariedad laboral, ausencia de cobertura adecuada de salud y acceso a la red de protección social asociada al empleo estable. Este grupo pasó de representar un 4,2% del total de la población del Gran Buenos Aires en 1980 a 16,8% en 1988 y 18,4% en 1990.<sup>19</sup> Una de las consecuencias directas de este proceso consistió en la reconfiguración del espacio urbano. En los antiguos cordones industriales de Buenos Aires, Rosario, Córdoba o Mendoza, la pauperización provocó que los contornos territoriales de la marginación laboral se difuminasen y que “la frontera entre las clases populares empobrecidas y los pobres [tendiese] a desaparecer”.<sup>20</sup> Los índices de mortalidad infantil, delincuencia, riesgo sanitario o desocupación entre las villas miserias, los asentamientos precarios y antiguos barrios obreros comenzaron a representar solo diferencias de grado. La barrios humildes se tornan por lo demás en zonas de “inmovilización de la pobreza” en un doble sentido, espacial y temporal: lo primero porque la vida de sus habitantes tiende a quedar confinada al ámbito local debido a la falta de oportunidades laborales; y lo segundo porque la curva de ascenso social propia del período de expansión industrial se constriñe drásticamente.<sup>21</sup>

El descontrolado aumento de precios operó sobre esta situación de base. En los primeros meses de 1989, el último del mandato del presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) Raúl Alfonsín, la crisis del sector externo, las masivas corridas al dólar y falta general de confianza condujeron a una devaluación de la moneda superior al 100%. La inflación alcanzó para mayo y junio tasas mensuales de 78,5% y 110%. Los precios eran remarcados en los comercios varias veces al día, diluyéndose así todo valor de referencia. Según la revista *Time* de junio, mientras los salarios durante los primeros cinco meses se habían incrementado alrededor de un 200%, el precio del pan lo había hecho en 554%, el de la leche en 441% y el del queso en 1.000%. Como es natural, la hiperinflación contrajo de forma dramática la capacidad de subsistencia de cerca del tercio de la población que se encontraba en situación de pobreza o indigencia. Pero en rigor las condiciones de extrema vulnerabilidad eran mucho más vastas si tomamos en cuenta que un 17,5% de las personas ocupadas eran hogares con ingresos per cápita de apenas entre 1 y 1,5 de la línea de pobreza.<sup>22</sup> Cualquier aumento drástico de precios los ponía de inmediato, antes que las estadísticas llegaran a capturarlos, en la imposibilidad de afrontar sus necesidades elementales. Agravó también la situación la paralización del Plan Alimentario Nacional (PAN), el programa puesto en marcha por el gobierno radical desde su asunción en 1983 para proveer alimentos a los hogares más humildes, debido al colapso de las cuentas públicas.<sup>23</sup>

La hiperinflación, como ningún otro fenómeno de mercado, pone en cuestión la función de las instituciones estatales como reaseguro último de las reglas mínimas de convivencia. Como han sostenido Silvia Sigal y Gabriel Kessler, la hiperinflación representa una experiencia única que “afecta el fundamento mismo de las interacciones sociales. Disminuye la previsibilidad de las relaciones entre los agentes económicos y bienes, la inco-

<sup>19</sup> Alberto Minujin, “En la rodada”, p. 24.

<sup>20</sup> Marie-France Prévot-Schapira, “Las políticas de lucha contra la pobreza en la periferia de Buenos Aires, 1984-1994”, *Revista Mexicana de Sociología*, 50:2 (1996), p. 79.

<sup>21</sup> Prévot-Schapira, “Las políticas de lucha”, pp. 80-81.

<sup>22</sup> Murmis y Feldman, “La heterogeneidad social”, pp. 57-58.

<sup>23</sup> Sobre el PAN, véase Jennifer Adair, *In Search of the 'Lost Decade': The Politics and Rights and Welfare during the Argentine Transition to Democracy (1983-1989)* (Ph.D. Dissertation, New York University, 2014), chapter: “With Democracy One Eats: Food, Hunger, and the Welfare State during the Argentine Transition to Democracy, 1983-1989”.

herencia de los sistemas de equivalencia entre los bienes se generaliza y la autoridad pública se desvanece".<sup>24</sup> Fue en este escenario que se llegó a los comicios generales del 14 de mayo. El candidato del peronismo Carlos Menem, como todos vaticinaban, ganó las elecciones, aunque lo hizo con márgenes aún mayores a los anticipados por las encuestas de opinión. Fiel a sus raíces políticas, Menem había prometido durante la campaña electoral una "revolución productiva" y un "salariazó". A nadie sorprendió pues que en los días posteriores los mercados reaccionaran con nuevas alzas en el valor del dólar y aumentos generalizados de precios. Mucho menos previsible fue que apenas diez días después de las elecciones presidenciales, los habitantes de las barriadas pobres de las grandes ciudades del país, que habían votado abrumadoramente por el candidato peronista, protagonizaran una ola masiva de saqueos.

#### LA POBREZA Y LOS SAQUEOS

Los disturbios por alimentos representaron una poderosa expresión de protesta, posiblemente la más impactante y perturbadora desde la recuperación de la democracia en 1983. En gran parte lo fueron porque, como recuerda un reciente estudio sobre la economía política de los *food riots*, en tanto la comida es el más elemental símbolo del contrato social, estos eventos representan un momento en que las inequidades materiales y simbólicas alcanzan su punto más álgido.<sup>25</sup> Los efectos del acontecimiento se dejaron por cierto sentir de inmediato. Solo en los días posteriores precipitó medidas tales como la extendida implementación de amplios programas asistenciales, el congelamiento de precios de los productos de primera necesidad y la anticipación de la fecha de asunción del presidente electo Carlos Menem. Aun así, para los pobladores de los barrios pobres, la elección del saqueo como comportamiento grupal pudo representar simplemente una respuesta desesperada, y por tanto legítima, a una situación de extrema necesidad. A diferencia de las huelgas, las manifestaciones callejeras, los cortes de rutas o los ataques a edificios públicos, el contenido beligerante y contestatario de los asaltos a comercios emanó de la sumatoria de los incidentes más que de la estructura de cada uno de ellos en particular o, menos aún, de su coordinación. Fue más una protesta generalizada que un movimiento general de protesta. De allí que la organización y los móviles de la práctica —los factores sobre los que tienden a focalizarse las teorías de la acción colectiva— digan mucho sobre la condición social de sus actores, la anatomía del movimiento, pero poco sobre su fisiología: las derivaciones políticas de las acciones al ponerse en relación entre sí y con la sociedad en su conjunto. Es imprescindible analizar ambas dimensiones, como lo es también no confundir una con otra. Los limitados objetivos y recursos organizativos de los participantes no se condijeron con las repercusiones de corto y largo plazo que adquirieron sus iniciativas.

Hasta donde sabemos, en efecto, los saqueos no parecieron ser coordinados o incitados por asociaciones de base o partido político alguno. Ello resulta particularmente claro si se los contrasta con la segunda oleada masiva de asaltos a comercios doce años más tarde, cuando los nuevos movimientos sociales de desocupados, instituciones barriales o punteros del peronismo procuraron en muchos casos canalizar, sino foguear, los reclamos po-

<sup>24</sup> Silvia Sigal y Gabriel Kessler, "La hiperinflación en Argentina: comportamientos y representaciones sociales", en Darío Cantón y Jorge Raúl Jorrot (eds.), *La investigación social hoy*, Instituto de Investigación Gino Germani, Buenos Aires, 1997, p. 157.

<sup>25</sup> Raj Patel y Philip McMichael, "A Political Economy of the Food Riot", *Review, A Journal of the Fernand Braudel Center*, XXXII:1 (2009), p. 23.

pulares.<sup>26</sup> En este sentido, si bien las revueltas de subsistencia de 1989 y 2001 pueden ser interpretadas como expresiones en espejo de las crisis terminales de la Argentina reciente, fueron acontecimientos de distinta índole. La primera surgió, en esencia, como una revuelta de consumidores; sectores de bajos ingresos imposibilitados de acceder a bienes de primera necesidad por el brote hiperinflacionario y la prolongada crisis económica precedente. Fue en virtud de la magnitud misma de los disturbios callejeros que se tornó evidente que la hiperinflación era un desencadenante y el saqueo un síntoma. Por detrás de ambos hechos, espectaculares pero efímeros, lo que salió a la superficie fue la pobreza a gran escala: hogares cuyos ingresos salariales no garantizaban su supervivencia y requerían de la instauración de mecanismos extra-mercantiles para hacerlo. La profundización del desempleo y subempleo estructural en la década venidera llevó a que cuando los saqueos volviesen a estallar, fuera insostenible verlos ya como una revuelta de consumidores pauperizados sino de desahuciados receptores del asistencialismo estatal y paraestatal. No era ya posible considerarlos trabajadores empobrecidos sino habitantes permanentes de la pobreza, autoidentificados como tales y representados en diversos colectivos de base territorial. Muy distintas eran las realidades de la revuelta de subsistencia de 1989, un movimiento sin linaje conocido ni esquemas preconcebidos de significación.

Aunque no pueda decirse que los saqueos fueran espontáneos, ningún evento de tamaño dimensión lo es, la similitud de las acciones en muy distintas localidades del país y la propia mecánica de los hechos sugiere que las acciones tuvieron un mínimo de articulación. La organización y liderazgo parecieron más bien laxos, compuesta de redes informales basadas en vínculos interpersonales y de vecindad. La gente actuó en grupo, no individualmente, pero hay muy escasos indicios de que entidades sociales o partidarias hubieran dado forma a sus iniciativas.<sup>27</sup> Es posible en cambio que los asaltos a comercios hubieran surgido, y fueran la extensión en otra escala, de estrategias familiares de subsistencia que por entonces habían empezado a generalizarse. Se dijo que en las semanas previas al estallido se multiplicaron los pequeños hurtos de alimentos por parte mayormente de mujeres que se veían empujadas por la necesidad. Así pues, en el Hogar Obrero del barrio Alberdi de Córdoba, uno de los primeros supermercados en sufrir saqueos, los empleados explicaron que no pensaron en principio denunciar el incidente porque actos de esta naturaleza, aunque de menor magnitud, eran para entonces más o menos habituales. El encargado sostuvo que “se trata de un hecho que suele ocurrir en los supermercados protagonizados por lo que llamamos ‘mecheras’ (mujeres que sustraen mercadería ocultándolas entre las ropas)”.<sup>28</sup> En ocasiones, ni siquiera procuraban disimularlo: lo hacían a vista de todos. Las radios de Rosario empezaron a reportar que madres o padres ingresaban con sus hijos a los supermercados, consumían productos lácteos al pie de las góndolas y dejaban los envases vacíos en el lugar. En tanto se hacía abiertamente y sin violencia alguna, no

<sup>26</sup> Javier Auyero, *La zona gris*, pp. 118-119, 143-149 y 160-161; Raúl Fradkin, *Cosecharás tu siembra. Notas sobre la rebelión popular argentina de diciembre del 2001*, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2002, pp. 48-50 y 55-56; Mónica Gordillo, *Piquetes y cacerolas. El 'argentínazo' del 2001*, Sudamericana, Buenos Aires, 2010, pp. 185-186; Federico Schuster, Germán Pérez, Sebastián Pereyra, et al., “La trama de la crisis: Modos y formas de protesta social a partir de los acontecimientos de diciembre de 2001”, Instituto de Investigaciones Gino Germani (*Informes de Coyuntura*, n° 3), Universidad de Buenos Aires, 2002, p. 7; y Jorge Ossona, *Punteros, malandras y porongas. Ocupación de tierras y usos políticos de la pobreza*, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2014, pp. 257-264.

<sup>27</sup> El semanario del Movimiento al Socialismo, *Solidaridad Socialista. Tribuna independiente del pensamiento socialista*, enumera una serie de “estructuras informales” de autogestión barrial que podrían haber servido para “motorizar” los saqueos. Las evidencias que presenta son empero muy escasas (Mónica Gordillo, “Acciones contenciosas”, p. 8).

<sup>28</sup> *Página 12*, 25/5/1989.

podría siquiera decirse que fueran en sentido estricto robos. Es fácil imaginar la estupefacción de los comerciantes ante semejante cuadro. Frente a la crisis de subsistencia provocada por la disolución del valor de la moneda, muchos parecieron optar por hacer la vista gorda, tal vez sensibilizados por la escena o, más pragmáticamente, "como forma de intentar evitar lo que sería realidad algunos días después".<sup>29</sup>

Lo sucedido días después distaría mucho en su forma pero no tanto en su contenido. Las acciones se volvieron multitudinarias a partir del 24 de mayo, un momento del mes en que los efectos de la escalada diaria de precios se tornaban más ominosos. Por entonces, grupos de entre cientos o incluso miles de personas comenzaron a congregarse en la puerta de los establecimientos. Llegado un punto, algunos forzaban las puertas de los comercios o se lanzaban piedras contra el personal de seguridad y la policía, en caso que estuviera en el lugar. No importaba quienes tomaran la iniciativa. Una vez que se daba el primer paso, los otros se sumaban. En muchos casos se probaron otros métodos. El dueño de un auto-servicio en el norte de Rosario relató que algunas personas pidieron charlar con él para acordar una distribución pacífica de alimentos. "Mire jefe -le dijeron- aquí hay muchos chicos que tienen hambre así que venimos a pedirle algo de comida". Viendo la multitud que aguardaba en la calle, no le quedó mucha alternativa. Sin embargo, debido a la escasa coordinación de la acción, bastó que algunas personas comenzaran a apedrear el local para que el resto ingresara a saquearlo.<sup>30</sup> En otras ocasiones, las conversaciones dieron frutos y se distribuyó alimentos ordenadamente. Pero tales negociaciones dependieron siempre de circunstancias particulares y no de la presencia de organizaciones de base o instituciones barriales, mucho menos militantes políticos, que canalizaran la iniciativa.

Dos hechos ocurridos en distritos del sur y oeste del conurbano bonaerense, servirán de ejemplo. El 30 de mayo, unas dos mil personas se congregaron frente al supermercado Llaneza de Wilde, el más grande de la zona, a pocas cuadras de las villas Azul e Itatí. Aunque la policía y la guardia de infantería parecían en control de la situación, el dueño del supermercado, para evitar males mayores, resolvió distribuir gratuitamente unos trescientos litros de leche y otros tantos kilos de pan, azúcar y fideos, los cuales fueron cargados en un camión de gran porte. Es muy significativo que quienes negociaron la entrega hubieran insistido que fueran los mismos empleados del supermercado o la policía los que hicieran el reparto de la mercadería. Como ambos se negaron, la tarea quedó en manos de los propios manifestantes. Según habían temido, mientras intentaban fraccionar los alimentos, grupos de vándalos tomaron el camión por la fuerza, se apropiaron de la mayoría de los bienes y destruyeron el resto. La gente presenció impotente como, en un momento de acuciante necesidad alimentaria, grandes cantidades de leche se derramaban del camión sin que nadie hiciera nada para detener semejante sin sentido.<sup>31</sup> Mientras la magnitud de la movilización y las características de los asentamientos nos harían esperar algún tipo de estructura de coordinación o liderazgo que impidiera este tipo de desbordes, la acción terminó siendo dominada por pandillas violentas insensibles a las necesidades del conjunto. Algo similar ocurrió cuando en el centro comercial de Moreno se reunieron unas dos mil personas de varios barrios cercanos a la espera de que se abriera una olla popular organizada por el municipio: grupos violentos impidieron su realización al comenzar a saquear los negocios de la zona. En lugar cercano, un camión del municipio, con la asistencia de la policía y los bomberos, procuró distribuir alimentos pero también debió huir apresurada-

<sup>29</sup> Eduardo Seminara, "Rosario entre la historia y la amnesia", en *Rosario, los saqueos, 10 años después (1989-1999)*, Instituto de Desarrollo Regional, Rosario, 1999, pp. 74-75.

<sup>30</sup> *Página 12*, 30/5/1989.

<sup>31</sup> Según un reporte, no solo la desorganización sino también la puja entre grupos de ambas villas habrían avivado la violencia (*Clarín*, 31/5/1989).

mente al verse sobrepasado por la avalancha de gente. Poco después, según el reporte, una pandilla de jóvenes ingresó por la fuerza en un comercio mayorista de alimentos alledaño al lugar y, detrás suyo, mujeres, hombres y niños sin que la policía nada pudiera hacer.<sup>32</sup>

En síntesis, si bien en ocasiones se alcanzó una mejor coordinación, los saqueos colectivos no requirieron, ni parecieron tener, organizaciones sociales que les dieran forma. Bastaba con la decisión de la gente, el efecto de demostración generado por acciones similares a lo largo del país y un aparato represivo desbordado, desorientado o pasivo ante una situación política caótica y el inédito escenario de millares de familias reclamando comida para poder subsistir.

Un contraejemplo a lo dicho lo ofrecen las villas miserias de la ciudad de Buenos Aires donde, a diferencia de otros conglomerados urbanos, se registraron muy escasos hechos de violencia colectiva. No puede decirse que los niveles de pobreza y vulnerabilidad fueran aquí menores que en el Gran Buenos Aires, Rosario o Córdoba. Sin embargo, para sorpresa de las autoridades y la policía, las casi treinta villas de la capital se mantuvieron en relativa calma. Si aceptamos las explicaciones dadas por los propios habitantes, una de las razones fundamentales fue la existencia de aceitadas asociaciones de carácter social o religioso que lograron poner en funcionamiento con cierta celeridad ollas populares y otros mecanismos de provisión de alimentos. Las instituciones mencionadas fueron el Movimiento de Villas y Barrios Carenciados de la Capital, la Comisión de Madres Intervillas y la Pastoral Villera.<sup>33</sup> Hay que recordar que las villas miserias que existían por entonces eran asentamientos de muy antigua data, conformados al calor del proceso de industrialización iniciado en la década de 1930. La existencia de sólidas organizaciones de base territorial, que se generalizarían en grandes cordones industriales en los años por venir, no resulta pues sorprendente. Para sus miembros el saqueo no era una respuesta adecuada a las angustiantes circunstancias del momento. Un cura de la Pastoral Villera explicó que habían tratado de persuadir a la gente que los ataques a comercios eran una reacción individual e inmedatista. Otro activista de Ciudad Oculta, preciándose de su capacidad de organización, reflexionó que “reaccionamos más rápido que cualquier gobierno y la gente lo reconoce. Acá todos nos conocemos y sabemos resolver nuestros problemas. Prueba de ello es que en estos momentos más difíciles nos pudimos unir los distintos sectores del barrio y hasta elaboramos un acta de compromiso con más de seiscientas firmas para trabajar juntos en el problema. Vaya usted a cualquier asamblea de un consorcio a ver si encuentra lo mismo”. “Marginados pero no marginales”, dijeron, “hambre tenemos, pero no somos suicidas”.<sup>34</sup>

Uno de los rasgos más notorios de la ola de saqueos, como ya apuntamos, fue la activa participación de delincuentes comunes o pandillas juveniles. Era la primera vez que una protesta social masiva aparecía en vinculación tan estrecha con la violencia delictiva. En el pasado, cuando habían sido canalizadas por partidos, sindicatos o movimientos sociales, las acciones colectivas —desde huelgas y manifestaciones callejeras hasta tomas de fábricas y tierras o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad— exhibieron un considerable grado de orden y disciplinamiento interno. Aunque la evidencia es fragmentaria, resulta evidente que en este caso fueron grupos violentos de distinto tipo los que en muchas instancias ofrecieron la logística mínima para poner en marcha el asalto a los comercios, especialmente cuando la acción involucraba enfrentamientos armados con la policía o los propietarios. Por cierto, el número de delincuentes y personas con distintos antecedentes penales fue prominente entre los arrestados, y es pertinente suponer que los más activos en

<sup>32</sup> *La Nación*, 31/5/1989.

<sup>33</sup> *Página 12*, 4/6/1989.

<sup>34</sup> *Página 12*, 4/6/1989.

los enfrentamientos fueron los más proclives a caer en manos de la policía. Escasa o nula, en cambio, fue la presencia de militantes de izquierda o barriales. Dado que el gobierno y las fuerzas de seguridad, con las imágenes todavía frescas del asalto al cuartel de La Tablada por parte de un grupo armado insurgente en enero de ese año, buscaron con el mayor ahínco “extremistas” y “activistas de izquierda”, su ausencia es muy sugestiva. El 1 de junio *La Nación* puso en su tapa la impactante noticia que “veintitrés activistas que estarían vinculados con la subversión” habían sido arrestados en San Miguel, pero dos días después, el juez reconoció que en verdad se desconocía su afiliación. Había en cambio dos militantes del Movimiento al Socialismo (el principal partido de izquierda por entonces) cuyo único delito había sido distribuir volantes. Por caso, las autoridades de Rosario informaron que de 750 personas detenidas durante los saqueos, un 80% tenía algún antecedente policial.<sup>35</sup> La cifra, va de suyo, es meramente indicativa considerando la tradicional manipulación de los datos por parte de la policía y el desconocido contenido de los prontuarios. Pero cuando se realizaron pesquisas en las zonas más calientes de conflicto, lo que se encontró fueron depósitos de mercancías listas para su reventa. En San Miguel, el epicentro de la violencia en el Gran Buenos Aires, la policía arrestó a unas treinta personas que estaban revendiendo el producto de los saqueos. Las armas de fuego o bombas Molotov que tenían en su poder eran las mismas que habían sido utilizadas en los enfrentamientos con la policía una semana antes.<sup>36</sup> Las crónicas de los hechos, como ocurriría en una escala aun mayor durante los saqueos de 2001, ofrecen numerosos ejemplos de la coexistencia de criminalidad y protesta.<sup>37</sup>

Desde luego, la presencia de sectores desafiliados no debe ser confundida con la imagen que el gobierno y algunos medios de comunicación intentaron instalar en la opinión pública: el de disturbios propiciados por la acción depredadora de bandas delictivas. Como hemos visto, los saqueos se originaron en la acción de multitud de familias que pacífica o violentamente, por medio de la negociación o la fuerza, se congregaron para tomar alimentos de los comercios. Sería asimismo incorrecto afirmar que las bandas organizadas, con la anuencia o no de la policía, crearon por sí mismas las oportunidades para el saqueo. Fue un conjunto de reacciones colectivas, amplificadas y propagadas a nivel nacional por los medios masivos de comunicación, lo que creó un clima general de desobediencia civil que sobrepasó por completo los diques de contención social. Lo que los grupos vinculados a actividades criminales hicieron, además de aprovechar la circunstancia para beneficio propio, fue proveer un mínimo de organización y pericia para forzar el ingreso a los comercios, intimidar a los dueños y hacer frente a las fuerzas policiales. Tenían el poder de fuego, la experiencia y la intrepidez para hacerlo. Por lo demás, las mismas cualidades que podían en ocasiones servir a los fines de la acción colectiva, podían también echarla a perder cuando se trataba de distribuciones concertadas de alimentos o expresiones de protesta sin fines de saqueo. Por cierto, la presencia de delinquentes en los asentamientos pobres generaba persistentes situaciones de inseguridad entre sus habitantes: el temor a ser víctimas de robos era ya por entonces intenso y extendido. Sabemos en este sentido que los delitos contra la propiedad, los más directamente asociados al deterioro profundo y sostenido del tejido social, se multiplicaron durante la década del ochenta, en especial a partir de 1986.<sup>38</sup> Durante los saqueos, se reportó que los vecinos llegaron incluso a denunciar a per-

<sup>35</sup> *La Nación y Página 12*, 31/6/1989.

<sup>36</sup> *La Nación*, 3, 4 y 15/7/1989.

<sup>37</sup> Sobre la intersección de actividades delictivas, redes territoriales de poder político y saqueos en los eventos de diciembre de 2001, véase Javier Auyero, *La zona gris*, pp. 61-77; Raúl Fradkin, *Cosecharás tu siembra*, pp. 54-55 y 61; Jorge Ossona, *Punteros, malandras y porongas*, pp. 257-264.

<sup>38</sup> Gabriel Kessler, “Entre el terrorismo de Estado y la ‘inseguridad’. Delito urbano y política en la transición democrática”, en Roberto Gargarella, María Victoria Murillo y Mario Pecheny (comps.), *Discutir Alfonsín*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2010, p. 118.

sonas “por cobrarles protección”.<sup>39</sup> Doce años más tarde, en 2001, serían los comerciantes quienes apelarían al recurso de pagar seguridad privada a los hampones del barrio para prevenir ataques. La convivencia, que de ninguna manera asimilación, de reclamos sociales y actividades delictivas salió por primera vez a la luz pública con los saqueos y probaría ser mucho más que un componente anecdótico de la crisis. Volveremos en la última sección sobre este punto.

Aparte del involucramiento de grupos marginales en las acciones, el saqueo en sí mismo es una práctica ambigua entre el mero beneficio individual y la protesta social, entendida como acciones orientadas a promover cambios de conjunto en las condiciones de vida de determinados colectivos humanos.<sup>40</sup> La particularidad de los motines de subsistencia es que la reivindicación colectiva se actualiza en el mismo acto de la apropiación de bienes con fines personales. Para marcar que la violación de la ley, o más bien de las normas básicas de convivencia, no era una libre elección sino el ejercicio de un derecho frente a una situación de indigencia extrema, los partícipes de los saqueos se ocuparon deliberadamente de distanciar el significado de sus actos de la violencia delictiva. Procuraron así restituir las bases morales de su conducta individual y la lógica social del comportamiento colectivo.<sup>41</sup> Se pueden establecer cuatro mecanismos generales de diferenciación.

El primero fue que la gente en ningún momento intentó ocultar su identidad. Hombres, mujeres y chicos entraban por la fuerza a locales donde habitualmente hacían sus compras, a plena luz del día, ante la presencia de policías, periodistas y, por supuesto, sus propietarios y empleados. Un comerciante de Rosario declaró: “Pude haber matado a muchos. Las mujeres llegaban con sus pibes y se llevaban paquetes de harina. Yo tenía una escopeta, y también preparé un sistema para electrificar las puertas, pero entonces miré al grupo y vi muchos conocidos. La mayoría era gente del barrio que siempre venía a comprar. Entonces no supe qué hacer”.<sup>42</sup> En un Supercoop de Córdoba, tras cargar ordenadamente comestibles “en bolsas de las tejidas que traían consigo y con las que habitualmente se va a la feria”, los saqueadores salieron “con la naturalidad de un cliente afortunado”. Según dijo un vecino del barrio, “creímos que eran clientes habituales, porque [se retiraron] sin apuros, sin correr y sin gritos”.<sup>43</sup> La dueña de un pequeño almacén en un asentamiento pobre de Rosario que fue saqueado había venido advirtiendo en los días previos que los habituales clientes, enfurecidos por los precios, “se iban gritando como si tuviéramos la culpa de todo”. Como casi todos en Argentina, presintió que algo iba a suceder. Pero como casi todos, nunca imaginó la magnitud de lo que se vendría: los vecinos vaciando los comercios a donde acudían cotidianamente.<sup>44</sup>

En segundo lugar, se advierte una y otra vez la intención de limitarse a la apropiación de comestibles evitando el dinero de las cajas registradoras, los electrodomésticos y otros productos de valor. Mientras no se hicieron distinciones en el tipo de comercios a saquear, sí las hubo en el tipo de bienes saqueados. Es un patrón de comportamiento inverso a lo sucedido en otras partes de América Latina. John Walton ha apuntado que durante la crisis económica de los años ochenta los blancos de las revueltas populares fueron selectivos y políticamente significativos: supermercados de lujo en Rio de Janeiro, tiendas de ropa y

<sup>39</sup> Citado en Neufeld y Cravino, “Los saqueos”, p. 153.

<sup>40</sup> Es indicativo de esta ambigüedad que un exhaustivo relevamiento de la protesta social en Argentina realizado por el grupo de investigación encabezado por Federico Schuster no incluyera los saqueos. Federico L. Schuster, German J. Pérez, Sebastián Pereyra, et al. *Transformaciones de la protesta social en Argentina 1989-2003*, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, 2006.

<sup>41</sup> Un análisis de este tema para los saqueos del 2001, en Javier Auyero, *La zona gris*, pp. 174-185.

<sup>42</sup> *Página 12*, 30/5/1989.

<sup>43</sup> *Clarín*, 25/5/1989.

<sup>44</sup> *Página 12*, 4/6/1989.

EL PAIS

# LA BATALLA DE LAS GONDOLAS

La hoguera se encendió la noche del domingo, en Rosario, y luego se extendió en Salta, Tucumán, Mendoza y Córdoba se repitieron las patéticas escenas. Hombres, mujeres y chicos se abalanzaron sobre comercios de alimentos. En el Gran Buenos Aires la vida humana se cotizaba a un sachet de leche o una bolsa de harina. La policía y la Gendarmería detuvieron el vendaval: 15 muertos, un centenar de heridos y no menos de 1500 detenidos.



electrodomésticos en San Pablo, automóviles y estaciones de servicio en Kingston, oficinas gubernamentales en Chile, dependencias del tesoro y la lotería en Perú, bancos en Brasilia, cuarteles de policía en Haití y la República Dominicana.<sup>45</sup> Durante el Caracazo, el objetivo primario de los ataques fueron los más afluentes paseos de compras de la capital y el saqueo abarcó todo tipo de mercancías.<sup>46</sup> Lo opuesto ocurrió en Argentina. Los pobres pusieron su mira en pequeños y medianos comercios barriales, pero el pillaje, lejos de ser indiscriminado, tendió a focalizarse en productos de primera necesidad. En Rosario, alguien explicó que “otros querían robar las tiendas. Pero robar ropa no. Eso es robo. Robar comida es necesidad”.<sup>47</sup> Por mucho que no fuera una regla moral inflexible, en particular cuando los disturbios crecieron en magnitud, el autocontrol fue muy notable considerando las oportunidades al alcance de la mano para hacerse de bienes a los que no tenían acceso. Lo sorprendente no es que muchos tomaran todo tipo de mercancías, sino que tantos otros se refrenaron de hacerlo. Una mujer describió así su comportamiento dentro del comercio: “Yo fui una boluda porque me puse a elegir. Me puse a caminar por los pasillos, entre la gente, como si estuviera comprando. Agarré dos botellas de aceite y un paquete de harina. Cuando me quise acordar había que salir corriendo. El [hijo] mayor y mi marido fueron los más vivos: agarraron los fideos. Por suerte después una vecina me cambió uno por la leche”.<sup>48</sup> Las mujeres, en efecto, desarrollaron una técnica: leche, harina, carne “y recién entonces lo que venga”. Una madre se preció de que de sus cinco hijos, el mayor de nueve años, pudieron por primera vez en un año comer yogurt —“incluso me acordé del perro y le traje Dogui”, agregó orgullosa.<sup>49</sup>

El tercer e interrelacionado mecanismo de diferenciación es que hubo un generalizado esfuerzo por evitar asaltos violentos a los comercios mediante una distribución voluntaria de alimentos por parte de sus dueños. El saqueo y consiguiente destrucción fue el resultado, no el objetivo, de las acciones colectivas. En el acceso a un local del Credicoop de Rosario, el más céntrico de los supermercados atacados, unas cincuenta mujeres con sus niños le dijeron a la policía que “no venimos a robar. Venimos a pedir comida”. Según la reportera, “las mujeres se sentaron en el piso en el medio de una multitud que las miraba con extrañeza y miedo. A los gritos comenzaron a explicarles: ‘Nosotros no robamos porque tenemos miedo. Si nos pegan un tiro, ¿con quién dejamos a los chicos?’. Con aplausos propios festejaron la llegada de cuatro cajas de cartón conteniendo carne. Las abrazaron y se fueron como habían llegado, caminando entre la gente que les abría paso”.<sup>50</sup> Escenas así, casi siempre con otro tipo de final, como sucedió en el mencionado supermercado Llaneza de Wilde, se repitieron en pequeños y medianos comercios. Raúl Fradkin ha sugerido en relación al estallido del 2001 que la apropiación de todo tipo de productos puso de manifiesto la “ira popular”, la cual “se expresa mucho más clara y directamente en la destrucción y es cuando el ‘saqueo’ adquiere plena dimensión” en tanto “auténtico motín popular”.<sup>51</sup> Diríamos entonces que doce años antes fue precisamente la actitud contraria la que orientó la lógica de la protesta y la dotó de un sentido de legitimidad. La dimensión política del acontecimiento resultó de la expresión colectiva de una necesidad y de la afirmación pública del derecho a satisfacerla. No se trató del desplazamiento hacia supermerca-

<sup>45</sup> John Walton, “Debt, Protest, and the State in Latin America”, en Susan Eckstein (ed.), *Power and Popular Protest. Latin American Social Movements*, University of California Press, Berkeley, 1989, pp. 317-318.

<sup>46</sup> Margarita López Maya, “The Venezuelan ‘Caracazo’ of 1989: Popular Protest and Institutional Weakness”, *Journal of Latin American Studies*, 35:1 (2003), pp. 117-137.

<sup>47</sup> *Página 12*, 31/5/1989.

<sup>48</sup> *Página 12*, 4/6/1989.

<sup>49</sup> *Página 12*, 31/5/1989.

<sup>50</sup> *Página 12*, 31/5/1986.

<sup>51</sup> Raúl Fradkin, *Cosecharás tu siembra*, p. 57.

dos y comercios barriales de un repudio general a las políticas gubernamentales y las inequidades socioeconómicas. Fue la mesura y la selectividad, más que el daño indiscriminado, lo que le imprimió su fuerza simbólica.

Por último, los partícipes en las acciones procuraron siempre que pudieran explicar públicamente los motivos de su conducta. No se mostraron orgullosos de lo que estaban haciendo. Pero creían tener justificadas razones para hacerlo. No eran ladrones, eran gente de trabajo. El gerente de una cadena de supermercados de Quilmes llamado Sumo explicó que una centena de personas habían destruido las vidrieras y portones de uno de sus locales, pero una vez adentro, como en otros casos, extrajeron solo comestibles evitando las muchas otras mercaderías expuestas en las góndolas. Relató entonces que "luego del saqueo, y mientras la policía había controlado la situación, se quedaron esperando la presencia de los canales de televisión y periodistas, ante quienes gritaban que tenían hambre y querían comer".<sup>52</sup> En un barrio de Nueva Córdoba, unas treinta mujeres se quedaron en las inmediaciones de una sucursal del Supercoop una vez concluido el saqueo y que el local cerrara sus puertas; cuando arribaron las fuerzas policiales, no los evitaron sino que les profirieron expresiones agresivas y clamaron de viva voz: "queremos comer".<sup>53</sup> Defender la legitimidad de las acciones, contrarrestando el estigma de la criminalización que estas mismas acciones por su naturaleza propendían a reforzar, fue parte de los saqueos como práctica colectiva. También la instalación pública de una palabra -hambre- que hasta entonces parecía confinada al léxico social de otras regiones del planeta menos afortunadas.

Es importante señalar que en paralelo a los ataques a comercios o la exigencia de distribución gratuita de alimentos se desarrollaron otras formas de movilización colectiva, tales como marchas, cacerolazos y cortes de calles. Según un minucioso relevamiento de los hechos, de los 353 eventos registrados por los periódicos durante estos días, al menos 14 tuvieron un contenido político articulado, vale decir, concentraciones frente a algún organismo de gobierno en demanda de cambios en la política económica (incrementos salariales, congelamiento de precios y otras medidas de emergencia).<sup>54</sup> Pero estas expresiones de protesta no fueron en general percibidas como complementarias sino alternativas a los saqueos. Por ejemplo, el 29 de mayo hubo una manifestación en un barrio de La Plata contra la subida de precios y "el hambre que ha ganado nuestros hogares". Algunos militantes de partidos de izquierda se sumaron, pero la marcha, que incluyó la interrupción del tránsito y la quema de algunas llantas, fue organizada por los propios residentes. Los participantes sostuvieron que la acción no tenía ningún contenido partidario; el propósito era expresar su descontento de forma que no fuera "robar supermercados".<sup>55</sup> En el barrio San Alberto de San Justo más de un millar de personas se congregaron, sin aparente intervención de organizaciones políticas, para hacer público reclamos similares. "Nosotros no propiciamos ningún saqueo", dijo uno de los manifestantes, "estamos aquí junto con los comerciantes para pedir que se acabe de una vez este desastre".<sup>56</sup>

No hay duda por supuesto que los partícipes en los asaltos a negocios compartían la indignación con la situación económica imperante y sus responsables directos; solo que sus marcos conceptuales fueron distintos a los de los discursos políticos convencionales. Una de las mujeres que se congregó, a instancias de otras mujeres de la villa donde vivía, frente al aludido supermercado Llana de Wilde contó que "lo que pasa es que ya no comemos. Los fideos estaban a 14 [australes] y ahora están a 50. Mi marido trabaja pero ya

<sup>52</sup> *La Nación*, 30/5/1989.

<sup>53</sup> *La Nación*, 25/5/1989.

<sup>54</sup> Iñigo Carrera *et al.*, *La revuelta argentina*, p. 51.

<sup>55</sup> *La Nación*, 30/5/1989.

<sup>56</sup> *Página 12*, 30/5/1989.

no nos alcanza. No es nada político: queremos comida”.<sup>57</sup> En una barricada de Villa Mitre se ofreció una articulada interpretación de lo sucedido. “Acá todo el mundo dice que en este país nadie se muere de hambre, y le metieron nomás a la remarcadora. Puede ser que haya zurdos, pero son unos pendejos y acá nadie les da bola”; mientras que de los empresarios y comerciantes se esperaba que dejaran de remarcar, de los gobernantes se esperaba algo muy concreto: “los políticos se tienen que poner de acuerdo entre ellos, Menem, Alfonsín y todos los demás, y mandar comida para este lado”.<sup>58</sup> Una mujer de Moreno dijo haber ido a saquear porque el sueldo del marido ya no alcanzaba: “ahora estamos en el fondo mismo; antes siempre llegábamos o alguien nos ayudaba: ahora ya no llegamos más, no tenemos más nada de nada, por eso saqué cosas, para los hijos, porque si yo tengo no saco nada, ni que me lo regalen, vea”. Los militantes de izquierda la invitaron a marchar frente a la Casa Rosada, el más emblemático escenario de la protesta social en la Argentina. Demandaban la renuncia del Presidente y el llamado a nuevas elecciones. Pensó por un momento que era una buena idea ya que nunca antes había estado en la Plaza de Mayo. Pero lo descartó por dos motivos. El primero de orden práctico: si dejaba su casa corría el riesgo de que fuera robada; el segundo, ideológico: “ellos querían ir a protestar para que se vaya el gobierno creo. Yo no quiero que se vaya el gobierno, quiero que nos manden comida”.<sup>59</sup>

Asegurarse el acceso a bienes básicos de consumo fue el reclamo genuino y profundo que emergió de la movilización colectiva. No hubo más allá. Las madres alimentando a sus hijos al pie de las góndolas constituyó su núcleo ideológico duro; obtener los alimentos a como diera lugar, su propósito último. La forma es el fondo; el modo, el mensaje. Estaríamos tentados a pensar que la inmediatez de la demanda es un síntoma de la naturaleza circunstancial y efímera del estallido, o de la limitada conciencia política de sus protagonistas. Después de todo, los sectores populares en Argentina habían sido partícipes de muy estructurados movimientos políticos y sociales; una experiencia a la que no debieron ser ajenos quienes se lanzaron al saqueo, muchos de los cuales continuaban integrados al mundo del trabajo asalariado. Era entonces, y lo es hoy, una sociedad altamente politizada. Lo que pocos percibieron en la época fue que en el intenso utilitarismo de sus aspiraciones, los disturbios por alimentos expresaban no la ausencia de política, sino la estruendosa irrupción pública de un nuevo tipo de política. Una política multifacética, volátil y difícil de encasillar mirada a la luz de movimientos previos centrados en reivindicaciones laborales (sindicalismo), partidarias (populismo), clasistas (marxismo) o de ciudadanía (los llamados nuevos movimientos sociales). Tampoco era asimilable a los emergentes discursos identitarios de género, étnicos o minorías religiosas. Los pobres no se preciaban de ser pobres. Hubieran preferido dejar de serlo. Sin embargo, era una política que traducía los valores e intereses de millones de personas y que en muchos aspectos prefiguraba, aunque no encarnase del todo todavía, complejos mecanismos de organización y representación. De ello nos ocupamos en lo que sigue.

#### LOS SAQUEOS Y LAS NUEVAS FORMAS DE ACCIÓN COLECTIVA

En un ensayo sobre la economía política de la revuelta de subsistencia, desde los motines populares de Antiguo Régimen hasta los numerosos incidentes ocurridos en las últi-

<sup>57</sup> *Página 12*, 31/5/1989.

<sup>58</sup> *Página 12*, 4/6/1989.

<sup>59</sup> *Página 12*, 4/6/1989. El 30 de mayo, el Movimiento al Socialismo había en efecto reclamado públicamente la inmediata renuncia del presidente Alfonsín (*Clarín*, 31/5/1989).

mas dos décadas en respuesta al alza de los precios de los alimentos y otras *commodities*, Raj Patel y Philip McMichael han notado que, “desde una perspectiva histórico-mundial, el motín de subsistencia siempre ha excedido la cuestión del alimento –su emergencia ha sido por lo general una señal de importantes transiciones en los ordenamientos político-económicos. Por lo demás, al igual que la hambruna, la revuelta de subsistencia suele registrar un largo proceso que conduce al momento de crisis, un proceso de carencias estructurales y erosión de derechos. Las revueltas de subsistencia, en otras palabras, son políticas...”<sup>60</sup> La observación es de indudable pertinencia para nuestro caso. Aunque a primera vista los saqueos pudieron parecer el subproducto de la inusitada crisis hiperinflacionaria, y así figuran en muchos de los estudios de síntesis sobre el período, no se trató en absoluto de una circunstancial demanda alimentaria.<sup>61</sup> Fue el emergente de transformaciones económicas estructurales de largo aliento que erosionaron drásticamente y permanentemente la posición social y los estándares de vida de vastos segmentos de la población. Y sin embargo sería erróneo asimilar las formas de acción colectiva y su discurso de derechos –la politicidad del movimiento– a otras experiencias históricas afines. En contraste con eventos recientes en países africanos y asiáticos, el movimiento no dimanó de la presencia de “organizaciones políticas preexistentes, sea en forma de sindicatos, fraternidades islámicas, iglesias o asociaciones de amas de casa, las cuales elevan las expectativas y expanden los repertorios de protesta”; menos aún, de la apelación a concepciones consuetudinarias de derechos, al modo del clásico paradigma de la “economía moral” propuesto originalmente por E. P. Thompson para las sociedades preindustriales.<sup>62</sup> La ola de saqueos de 1989 fue mucho menos el emergente de rutinas previas de reclamo social que un momento excepcional de innovación. Es ese su rasgo definitorio.

A modo de conclusión, parece pues provechoso pensar los asaltos a comercios a la luz de los repertorios de protesta que surgirían durante los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa en respuesta al drástico achicamiento del Estado, el desempleo masivo, la precarización laboral, la desindustrialización y otros fenómenos que reforzaron la pauperización de vastos sectores sociales iniciada en el período previo. Tal es el caso de las organizaciones piqueteras, las tomas de tierras, las puebladas y los cacerolazos.<sup>63</sup> En primer lugar, hay que señalar el ostensible paralelismo entre los asaltos a comercios y los movimientos de ocupación de terrenos baldíos que comenzaron a expandirse por los grandes cordones industriales desde el retorno de la democracia y adquirieron un extraordina-

<sup>60</sup> Raj Patel y Philip McMichael, “A Political Economy”, p. 11. Traducción del autor.

<sup>61</sup> Marcos Novaro, *Historia de la Argentina. 1955-2010*, Buenos Aires, Siglo XXI Editores, 2010, pp. 222-223; Luis Alberto Romero, *Breve historia contemporánea de la Argentina*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2001, pp. 267-268; Ezequiel Adamovsky, *Historia de las clases populares en la Argentina. Desde 1880 hasta 2003*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2012, pp. 344-345.

<sup>62</sup> Raj Patel y Philip McMichael, “A Political Economy”, p. 31. E. P. Thompson, “La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII”, en *Tradición, revuelta y consciencia de clase*, Grijalbo, Barcelona, 1979, pp. 62-134.

<sup>63</sup> Denis Merklen identificó tres rasgos comunes en los repertorios de protesta originados desde la recuperación democrática hasta nuestros días: “la exterioridad respecto de las relaciones salariales clásicas, el anclaje territorial y una nueva relación con el Estado, basada en el conflicto por la distribución de una ayuda social cuyos recursos son tan indispensables como escasos e insuficientes” [*Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argentina 1983-2003)*, Ediciones Gorla, Buenos Aires, 2010, p. 81]. Seguimos a continuación estos tres factores. Algunas obras de conjunto sobre las nuevas formas de protesta y movilización incluyen Javier Auyero, *La protesta. Relatos de la beligerancia popular en la Argentina de los noventa*, Libros del Rojas, Buenos Aires, 2002; Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, *Entre el barrio y la ruta. La experiencia de las organizaciones piqueteras*, Editorial Biblos, Buenos Aires, 2003; Federico Schuster et al., *Transformaciones de la protesta social en la Argentina*; Andrea Andújar, *Rutas argentinas hasta el fin. Mujeres, política y piquetes (1996-2001)*, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2014.

rio impulso a partir de la década siguiente.<sup>64</sup> Ambas constituyeron acciones colectivas orientadas a obtener por medio de la fuerza recursos esenciales frente a la creciente incapacidad de hacerlo por medio de ingresos salariales regulares. Privados del goce de bienes de primera necesidad (alimentación y vivienda) en virtud de la caída de los ingresos y de una creciente marginación de las redes de protección asociadas al empleo estable, los pobres no se limitarían ya a articular sus demandas a través del simbolismo político de las tradicionales expresiones de protesta y sus discursos universalizantes de derechos sociales: tomarían por la fuerza, de ser necesario, sus medios de subsistencia. Era un modo de acción colectiva, tanto como un modo de ser social. La radical beligerancia de estos movimientos yace en la descarnada literalidad de sus prácticas, no en las metáforas sociales de sus proclamas. Lo que los saqueos de 1989 consiguieron, en modos que las tomas de tierras no, todavía por entonces, fue poner en la agenda pública la especificidad de esta política. Se sabía lo que los pobres eran; ahora estaban todos notificados de lo que podrían hacer.

El evento, por otro lado, fue el producto de la inscripción territorial de la acción social. Las raíces profundas del fenómeno son bien conocidas. La literatura sociológica ha mostrado cómo la retracción de la economía fabril y la sociedad salarial llevaron a que las relaciones de vecindad sustituyeran a las relaciones laborales como núcleo primario de integración social y defensa de las condiciones de vida. La dinámica descolectivizadora que acarreó la crisis terminal del modelo desarrollista fue acompañada de un proceso de recolectivización en torno a los sitios de residencia. El lugar donde se vive, no el lugar donde se trabaja, es lo que pasó a definir el sentido de identidad colectiva. “La nueva fábrica es el barrio”, proclamaría la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) pocos años después.<sup>65</sup> A su manera, los saqueos fueron el más estruendoso precipitado de esa reconfiguración. Solo que a diferencia de posteriores modalidades de protesta, no contaron con asociaciones de base, movimientos sociales y/o punteros partidarios que canalizaran las acciones locales. No se trataba pues de un retorno a prácticas políticas pasadas articuladas en torno a sindicatos, partidos políticos, universidades, minorías o grupos de interés, pero tampoco de una reacción desesperada o anómica que en algunos círculos partidarios e incluso académicos se definió como apolítica sino antipolítica. Era un modelo de conflictividad social centrado en las barriadas pobres que se iría robusteciendo con el paso de los años. Prefiguraba modos de movilización colectiva y demanda económica que, con la desocupación de dos dígitos y la masificación de la precarización laboral, encontrarían en movimientos sociales inéditos hasta entonces nuevos lenguajes y mecanismos de representación.

La naturaleza de los vínculos con el Estado es un tercer rasgo de interés. Mientras, durante los saqueos mismos, la CGT y las fuerzas políticas se enfrascaron en discusiones sobre aumentos de sueldos, congelamiento de precios y otras medidas macroeconómicas, los pobladores de los barrios pobres emplazaron a los poderes estatales a tomar en sus manos la provisión de alimentos. Las discusiones en torno a los ajustes salariales, el tradicional terreno de las pujas distributivas, no contenía ya la realidad de la pobreza. El mensaje era claro: los programas asistenciales debían ocupar un lugar separado y permanente de las políticas gubernamentales a todos los niveles. Las instituciones de protección laboral de-

<sup>64</sup> Pablo Ariel Vommaro, “Territorios, organizaciones sociales y migraciones: Las experiencias de las tomas de tierras y los asentamientos de 1981 en Quilmes”, *Espaço Plural*, 20 (2009), pp. 81-93; Denis Merklen, “Organización comunitaria y práctica política. Las ocupaciones de tierras en el conurbano de Buenos Aires”, *Nueva Sociedad*, 149 (1997), pp. 162-177; Jorge Ossona, *Punteros, malandras y porongas*.

<sup>65</sup> Citado en Maristella Svampa, “La irrupción piquetera. Las organizaciones de desocupados del conurbano bonaerense”, en Gabriel Kessler (director), *Historia de la provincia de Buenos Aires: el Gran Buenos Aires*, Edhasa-Unipe, Buenos Aires, 2015, p. 403. También el concepto “dinámica descolectivizadora” es tomado de este artículo.



bían complementarse con planes sistemáticos de contención social. Hay que recordar al respecto que incluso el PAN, el ambicioso programa de ayuda alimentaria implementado por el gobierno radical, había sido concebido como una medida paliativa frente a las políticas económicas de la dictadura —la contracara en el campo social del juicio a las juntas en el de los derechos humanos.<sup>66</sup>

Todo ello comenzaría a cambiar en mayo de 1989. La pobreza debió empezar a ser tratada como un factor estructural. El mercado, al menos hasta nuevo aviso, no iba a ofrecer soluciones mágicas. El hambre era un problema comunitario y debía ser tratado como tal. Aun antes que los saqueos se acallaran del todo, en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y la mayoría de las provincias, se hubieran o no registrado actos de violencia, se pusieron en pie múltiples planes asistenciales, tales como comedores sociales, subsidios a escuelas para ofrecer comida a sus alumnos, y de ser necesario hermanos, los siete días de la semana, bolsas de alimentos, cupones alimentarios básicos y otros. En Lomas de Zamora, por caso, se inauguraron 163 centros de abastecimiento que alimentaban a unas 300.000 personas, cerca de la mitad de la población de todo el partido.<sup>67</sup> Financiados en principio por los erarios provinciales, fueron los municipios, los jefes territoriales, las escuelas, las organizaciones eclesiales, las ONGs y otras asociaciones locales los que empezaron a gestionar los fondos asistenciales. La larga y arrevesada historia de las políticas sociales permanentes y en gran escala se había puesto en marcha. Los catastróficos efectos de la deso-

<sup>66</sup> Marie-France Prévot-Schapira, "Las políticas de lucha", p. 83. Véase también, Victor Armony y Gabriel Kessler, "Imágenes de una sociedad en crisis", p. 112.

<sup>67</sup> Mónica Gordillo, "Acciones contenciosas", p. 7. Ejemplos de distintos programas en *Página 12*, 31/5 y 3/6/1989 y *Clarín*, 2/6/1989. En Buenos Aires, la legislatura provincial sancionó el 2 de junio una serie de nuevos gravámenes que dotarían el tesoro con recursos necesarios para financiar los gastos sociales de manera estable. Un derivado directo de este proceso fue la sanción de la ley de 1992 que estableció un fondo de reparación histórica para atender las necesidades sociales de los municipios del conurbano de Buenos Aires y La Plata.

ocupación y subocupación masiva y el desguace del empleo público harían el resto.<sup>68</sup> Pero lo que la primera ola de saqueos consiguió fue exponer que los pobres, los mares de indigencia en que se habían convertido los otrora pujantes cordones industriales, debían ser objeto especial de atención por parte del Estado. Eran millones de personas excluidas sin esperanza del mercado laboral estable; un sector social que José Nun conceptualizó como la “masa marginal” y que el sociólogo alemán Ralf Dahrendorf, al subrayar que no se trataba de una superpoblación relativa funcional al sistema productivo, definió gráficamente como los que *están de más*, los que *no se necesitan*: “el resto puede vivir sin ellos y le gustaría hacerlo”.<sup>69</sup> Lo que a partir de mayo de 1989 ya no podrían hacer es hacer como que no existían.

La generalizada presencia de las mujeres es un cuarto rasgo que afloró durante la protesta y tendría un largo recorrido por delante. Sabemos que desde fines de los años setenta la caída de los ingresos y el subempleo masculino habían incrementado el peso de los ingresos femeninos en la economía familiar. Asimismo, eran las mujeres quienes gestionaban los comedores, guarderías y otras asociaciones comunitarias que se multiplicaron en los asentamientos pobres frente al creciente deterioro de las condiciones de vida. Aunque reproducían en otra escala tareas propias del ámbito doméstico (la alimentación y el cuidado de los hijos), la proyección de la labor de las mujeres a las organizaciones sociales conllevó una mayor incidencia en los asuntos públicos. De modo pues que para los sectores populares las transformaciones en la estructura socioeconómica trajeron aparejadas también transformaciones en las funciones y jerarquías de género.

Claramente, como lo ilustran los testimonios recogidos en la sección anterior, los saqueos fueron en gran parte obra de las mujeres. Participaron de manera masiva de las movilizaciones y se enfrentaron a los rigores de la represión y las detenciones colectivas. Así, por ejemplo, en ocasión que la policía bonaerense estaba intentando precaver el saqueo de un supermercado de San Miguel, “se generó una situación violenta cuando las madres levantaron a sus bebés en alto y le gritaban a la Policía que no disparen”.<sup>70</sup> Es frecuente en las crónicas que aparezcan hombres yendo a buscar a sus esposas a las comisarias. Muchas veces los varones ocuparon papeles secundarios, fuera porque eran más pasibles de ser reprimidos con violencia o porque eran acciones que mancillaban su sentido de la dignidad. No se trató de un hecho circunstancial. Los estudios sobre las posteriores organizaciones piqueteras indican que la pérdida del lugar del hombre como principal proveedor del hogar, al desafiar arraigadas nociones de masculinidad, conducía con frecuencia a la pasividad y la autculpabilización. Las mujeres en contraste ganaron mayor prominencia. Es un fenómeno asociado asimismo al peculiar contenido ideológico de las nuevas formas de protesta; según Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, “al salir a la ruta, esgrimiendo su condición de jefas o madres de familia, esto es, como vehículo despolitizado de la necesidad, paradójicamente contribuyeron a la politización del tema del hambre”.<sup>71</sup> Las resonan-

<sup>68</sup> Sobre distintos aspectos de las políticas sociales luego de la restauración democrática, véase Marie-France Prévot-Schapira, “Las políticas de lucha”; Javier Auyero, *Poor People's Politics. Peronist Survival Networks and the Legacy of Evita*, Duke University Press, Durham, 2001; Carlos Acuña, Elizabeth Jelín y Gabriel Kessler (comps.), *Políticas sociales y acción local: 10 estudios de caso*, IDES-UNGS-CLASPO, Buenos Aires, 2006.

<sup>69</sup> Citado en José Nun, *Marginalidad y exclusión social*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2001, p. 31.

<sup>70</sup> *Clarín*, 30/5/1989.

<sup>71</sup> Maristella Svampa y Sebastián Pereyra, *Entre el barrio y la ruta*, p. 164. Sobre la participación femenina y las relaciones de género en los nuevos movimientos sociales, véase Javier Auyero, *Vidas Belligerantes. Dos mujeres argentinas, dos protestas y la búsqueda de reconocimiento*, Universidad de Quilmes, Buenos Aires, 2004; Cecilia Cross y Ada Freytes Frey, “Movimientos piqueteros: Tensiones de género en la definición del liderazgo”, *Argumentos*, 20:55 (2007), pp. 77-94; Cecilia Espinosa, “Cansadas de ceder”. Sentido de la politiza-

cias de este argumento para el análisis de la previa ola de saqueos son evidentes: no solo las mujeres se pusieron al frente de las demandas alimentarias sino, como hemos observado, fueron las que mayoritariamente asumieron el peso de legitimar e insuflar de contenido ético las prácticas colectivas ante periodistas, vecinos de la zona, fuerzas de seguridad y quien quisiera escuchar. Los usos políticos del saqueo son inescindibles de los usos políticos de la maternidad, del inalienable derecho de las mujeres a participar en la esfera pública para asegurar la supervivencia familiar. Y cuando se piensa en el largo arco de la movilización popular en la historia argentina, conviene recordar asimismo que tanto los saqueos como luego los piquetes, puebladas y cacerolazos, son levantamientos comunitarios, no de determinados grupos ocupacionales. Evocan por tanto la dinámica de los conflictos sociales de comienzos del siglo veinte, antes de que el discurso y las prácticas de las grandes organizaciones sindicales, con sus rígidas nociones de honorabilidad masculina y confinamiento de la mujer al ámbito doméstico, tendiese a subsumir el mundo de la protesta laboral.<sup>72</sup>

La nueva cuestión social se hizo presente en una quinta arista de los asaltos a comercios que ha sido mencionada en la sección anterior y sobre la que quisiera ahora detenerme: la articulación entre protesta y criminalidad. También en este terreno lo que a primera vista aparecía como anecdótico o contingente, probó ser el síntoma de cambios de fondo en el mundo popular. Las investigaciones han comprobado que las condiciones de vida surgidas de la dinámica excluyente del mercado laboral condujeron a una diversificación de las fuentes de ingreso de los habitantes de las barriadas pobres. En el pasado, la reproducción familiar había estado asentada en el trabajo estable y socialmente reconocido de los cabezas de hogar, así como en un estilo de vida austero acorde a medios de vida acotados pero previsibles y proyectables al futuro en virtud de la robustez de la economía fabril, el poder de los gremios y las sólidas protecciones de la legislación social. Por el contrario, la precarización laboral propició la complementación de retribuciones salariales insuficientes y aleatorias con una variedad de ingresos de origen económico y no económico: desde trabajos informales y ocasionales de distinta naturaleza, hasta los bienes y servicios provistos por organizaciones barriales (las ocupaciones de tierras son un ejemplo) y la mencionada recepción de planes asistenciales públicos. Para jóvenes socializados en un mundo sin perspectivas tangibles de ascenso social derivadas de la estabilidad laboral, así como de completa degradación de los servicios estatales de seguridad y educación, los delitos contra la propiedad comenzaron a formar parte del menú de alternativas. Los estudios sobre el delito al menudeo revelan que las actividades legales e ilegales dejaron de ser mutuamente excluyentes. Entre el universo del crimen profesionalizado y el universo del trabajo se fue erigiendo una amplia franja de situaciones intermedias. Un individuo puede combinar a lo largo del tiempo ambas actividades sin por ello considerarse un delincuente.<sup>73</sup>

---

ción del género en el Espacio de Mujeres de un movimiento piquetero”, *(Con)textos. Revista d’antropologia i investigació social*, 5 (2011), pp. 46-61; Cecilia Cross y Florencia Partenio, “¿Cuál cambio social? Construcción de vínculos políticos en un espacio de mujeres piqueteras”, *Revista Punto Género*, 1 (2011); Andrea Andújar, *Rutas argentinas hasta el fin*.

<sup>72</sup> Silvana Alejandra Palermo, “‘En nombre del hogar proletario’: Engendering the 1917 Great Railroad Strike in Argentina”, *Hispanic American Historical Review*, 93:4 (2013), pp. 585-620; Débora D’Antonio, “Representaciones de género en la huelga de la construcción: Buenos Aires, 1935-1936”, en Fernanda Gil Lozano et al. (ed.), *Historia de las mujeres en la Argentina* (vol. 2, siglo XX), Taurus, Buenos Aires, 2000, pp. 245-265.

<sup>73</sup> Gabriel Kessler, *Sociología del delito amateur*, Paidós, Buenos Aires, 2006, cap. 2: “Delito, trabajo y provisión”, 29-59. Sobre la relación entre los cambios en el mercado laboral y el incremento “en los niveles de transgresión normativa”, véase también, Alejandro Isla y Daniel Míguez, “De las Violencias y sus Modos. Introducción”, en Alejandro Isla y Daniel Míguez (coords.), *Heridas urbanas. Violencia delictiva y transformaciones sociales en los noventa*, Editorial de las Ciencias, Buenos Aires, 2003, pp. 7-8.

A su vez, esta ampliación de las bases sociales del delito conllevó una extensión de su ámbito espacial: la violencia comenzó a formar parte de la vida cotidiana de los barrios pobres. Así pues, el estudio de Nathalie Puex sobre una villa miseria del conurbano bonaerense, entre otros, apunta que para fines de la década de los ochenta, la época de los saqueos, las actividades delictivas que en el pasado tendían a externalizarse conforme a arraigados códigos internos de convivencia, pasaron a desplegarse dentro mismo de la villa en consonancia con la rápida degradación de las condiciones de vida y la consiguiente desestructuración de los vínculos sociales. La colusión de la policía con el delito, la incapacidad de la escuela pública para generar en sus aulas modelos de socialización alternativos al de los pasillos de la villa y la incontenible expansión del tráfico y consumo de drogas completaron la obra. Los barrios de clase media no fueron los únicos que para esta época vieron cómo las viviendas empezaron a cubrirse de rejás.<sup>74</sup>

El resultado neto de este proceso fue la paulatina erosión de los marcos socio-culturales heredados. Entre crecientes sectores de la población de más bajos ingresos, el prestigio del trabajo estable como único modo legítimo de ganarse la vida fue dejando paso al de la capacidad de obtener por distintos medios los recursos para satisfacer las necesidades de subsistencia e imperativos de consumo cultural. Es un modelo de comportamiento que Denis Merklen y Gabriel Kessler han conceptualizado, respectivamente, como “la lógica del cazador” y “la lógica del proveedor” para diferenciarlo de la lógica del asalariado (o, metafóricamente, del agricultor). Aunque ganó prominencia a partir de la década de los noventa estaba presente desde antes.<sup>75</sup> El estallido de 1989 lo exhibió ante la mirada atónita del resto. Como el mismo Kessler ha corroborado, los saqueos marcaron un punto de inflexión en la percepción del delito. Si hasta entonces ocupaba un lugar secundario en las preocupaciones públicas y aparecía asociado a casos criminales resonantes, se constituiría a partir de allí en un tema central de debate bajo la fórmula ya “inseguridad y cuestión social”.<sup>76</sup> La apropiación directa de bienes y la tensa coexistencia de protesta y criminalidad —no menos que la localización territorial de la protesta, la exigencia de que los gobiernos pusieran en marcha programas asistencialistas masivos y la activa participación de las mujeres en las acciones colectivas— fue mucho más que un fenómeno ocasional surgido de la escalada de precios y la caótica coyuntura política: tradujo procesos estructurales de largo aliento.

Cabría agregar, por último, que los disturbios por alimentos no sólo sacaron a la luz nuevas realidades sino que constituyeron un momento constructivo en la historia de la conflictividad social argentina. Por un lado, al visibilizar el problema del hambre como un asunto de interés común, potenciaron la organización de ollas populares, comedores comunitarios, guarderías infantiles y otras asociaciones de base. Los planes asistenciales públicos no fueron los únicos dispositivos de ayuda social surgidos de la crisis. Por ejemplo, en asentamientos pobres de los distritos de San Miguel y José C. Paz, aun para fines de la década siguiente el estallido de 1989 figuraba en la memoria social como “el tiempo de los saqueos y las ollas”; era asimismo percibido como “un punto de quiebre”: lo que comenzó

<sup>74</sup> Nathalie Puex, “Las formas de la violencia en tiempos de crisis: una villa miseria del Conurbano Bonaerense”, en Alejandro Isla y Daniel Míguez (coords.), *Heridas urbanas*. Por ejemplo, para esta misma época se reportó que uno de los mecanismos de autoorganización barrial frente a las realidades del acelerado empobrecimiento consistió en “comisiones de vecinos que se encargaban de rondas nocturnas de patrullajes y sistemas de alarmas ante robos a través del uso de silbatos” (Mónica Gordillo, *Acciones contenciosas*, p. 8).

<sup>75</sup> Denis Merklen, *Pobres ciudadanos*, cap. 6: “Individuos y ciudadanos. Notas para un enfoque objetivista de la subjetividad popular”, pp. 183-210; Gabriel Kessler, *Sociología del delito amateur*, pp. 41-48; Gabriel Kessler y Denis Merklen, “Una introducción cruzando el Atlántico”, en Robert Castel, et al., *Individuación, precariedad, inseguridad. ¿Desinstitucionalización del presente?*, Paidós, Buenos Aires, 2013, pp. 9-31.

<sup>76</sup> Gabriel Kessler, “Entre el terrorismo de Estado y la ‘inseguridad’”, p. 123.

como una situación de emergencia se transformó en permanente.<sup>77</sup> Por otra parte, los saqueos mismos se convirtieron en parte del repertorio de protesta de los sectores populares. No podía ser por supuesto una práctica habitual y rutinaria, pero sí un recurso disponible en momentos especiales de penuria económica e inestabilidad política. Pocos meses después, durante una nueva escalada de precios en los inicios de la administración peronista, volverían a producirse. Los disturbios por alimentos de diciembre de 2001, que superaron en violencia y extensión geográfica a los de 1989, no se originaron por una crisis inflacionaria sino por la recesión, el desempleo y la sostenida caída de los ingresos en un contexto de inusitada crisis política y colapso bancario. Y, a diferencia de su predecesora, tomó a pocos por sorpresa. Además, la movilización inicial fue en muchos casos, aunque no siempre, una operación concertada por movimientos sociales, organizaciones de base territorial o jefes barriales. Contra los pronósticos de la época, a veinticinco años de la primera ola de saqueos, fueron estos no la hiperinflación los que probaron ser un fenómeno recurrente del paisaje socioeconómico argentino.

Independientemente de la filiación concreta del estallido con los movimientos sociales que vinieron luego, es posible formular al menos una conclusión: la inscripción de la suma de actos de saqueo en la escena pública fue una poderosa arma de reconocimiento de la extensión de la pobreza y, al mismo tiempo, del sentido de identidad colectiva de los pobres mismos. Vieron en las pantallas de televisión y las portadas de los diarios que había muchos otros como ellos y experimentaron el poder de intimidación que adquiría la acción agregada de sus acciones. En el impacto acumulativo de los hechos de violencia, en el conjunto de todas las imágenes mediáticas que los multiplicaron y dieron sentido de conjunto, se construyó un relato y una subjetividad. La pobreza hizo los saqueos tanto como lo saqueos hicieron a la pobres. Los actores sociales, después de todo, se constituyen en el conflicto. Cuando los pobladores de barrios humildes como los de San Miguel y José C. Paz hablaban a mediados del 2001 de “volver a los saqueos” como un horizonte factible de posibilidades, pudieron no estar pensando necesariamente en ninguna agrupación social o política determinada.<sup>78</sup> Pero tampoco sin duda en el confinado universo de sus familiares y vecinos. Evocaban al menos un agregado colectivo abstracto —los pobres, los carenciados, *los que sobran*, aquellos a los que el mercado les deniega el acceso a bienes y servicios indispensables— cuya existencia social se había develado a la luz pública en el sonido y la furia de los últimos días del primer gobierno de la democracia.

<sup>77</sup> María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, “Los saqueos”, pp. 160-162.

<sup>78</sup> María Rosa Neufeld y María Cristina Cravino, “Los saqueos”, p. 164.

